

ECUADOR FRENTE AL EJE WASHINGTON-BOGOTA (*)

René Báez (**)

I. El Plan Colombia: una fementida campaña contra las drogas

La aprobación por el Congreso norteamericano, a mediados del 2000, de una gigante asignación presupuestaria para el Plan Colombia, financiamiento destinado marginalmente al Ecuador, involucró aún más a nuestro país en la guerra civil que asuela al vecino norteño desde hace medio siglo.

El Plan Colombia, diseñado por el gobierno de Andrés Pastrana con el concurso de asesores estadounidenses y puesto en vigor por el presidente Bill Clinton en su visita relámpago a Cartagena de agosto de ese año, detrás del membrete de cruzada contra el narcotráfico, oculta oscuros intereses tanto de Washington como de la oligarquía “paisa”. Desglosemos tales propósitos.

El objetivo geopolítico cardinal de EE. UU. después de la implosión del “socialismo real” europeo no es otro que consolidar su hegemonía unipolar. De ese propósito mayor se derivan las metas específicas del Plan Colombia: reasegurar el control político-militar estadounidense del norte de Sudamérica; establecer bases militares para apropiarse de los recursos naturales, energéticos y bioenergéticos de la Amazonía; despoblar territorios; debilitar la gravitación geopolítica del Brasil; y, en fin, evangelizar a los “sudacas” en el culto al mercado y la democracia formal.

En el terreno estrictamente económico, el Plan busca reforzar las columnas del capital financiero norteamericano, sustentando la producción y la venta de armas, apuntalando la industria química y mejorando los réditos para Wall Street provenientes del tráfico internacional de drogas naturales. Los beneficios del programa para los “los señores de la guerra” se manifestaron desde que la fracción sustantiva de los fondos provistos por Washington tuvo como destino la compra de helicópteros Blackhawks, que solo se fabrican en USA. Asimismo, un reporte del Nuevo Herald coincidente con la oficialización del Plan dio cuenta que las fumigaciones de los cultivos de coca y amapola se realizaban con el Roundup, un agrotóxico producido por la Monsanto. Intensificados los bombardeos químicos, se conoció que el precio del kilo de cocaína en Nueva York se disparó desde 120 mil a 240 mil dólares, para felicidad de los “blanqueadores” primermundistas que, en última instancia, son los mayores beneficiarios de ese colosal negocio, equiparable al del petróleo y al de la fabricación y comercio de material bélico.

En tiempos de la administración de George W. Bush, el Plan Colombia fue redefinido con el sarcástico nombre de Iniciativa Regional Andina (IRA), con el abierto propósito

(*) Ponencia presentada al III Congreso de Pensamiento Latinoamericano a realizarse en la Universidad de Gualajara, México, entre el 17 y el 19 de noviembre del 2003.

(**) Profesor investigador de la Facultad de Economía de la PUCE y del Instituto Superior de Posgrado de la Universidad Central del Ecuador.

de internacionalizar el conflicto interno de la nación fronteriza; y, después del fatídico 11-S, fue incorporado a la campaña mundial contra el terrorismo decidida por los “halcones” del complejo industrial-militar norteamericano como medio de “neutralizar” a los disidentes de la globalización corporativa.

Como todo hecho histórico, el Plan Colombia se sustenta también en factores endógenos, en este caso inherentes a nuestro vecino norteño. ¿A qué aludimos?

Producto de una evolución contrahecha y subordinada, la crisis cafetalera colombiana de los años 70 derivó en una constelación de problemas económicos, sociales, políticos e institucionales cada vez agudos. Una trágica deriva de su crisis multidimensional ha sido que el país sudamericano se convierta, a partir del citado decenio, en un importante productor y exportador de drogas naturales al vasto mercado yanqui, fenómeno inducido por el aperturismo comercial instrumentado por los gobiernos conservadores y liberales al tenor de las recomendaciones-imposiciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

La apertura colombiana a la importación de bienes producidos por el poderoso y subsidiado “agrobusiness” norteamericano, a la par que provocó la ruina de los campesinos, forzó a estos al éxodo a las ciudades o a subsistir con cultivos no tradicionales. Esta “reconversión” de la agricultura colombiana resultó en la constitución de una matriz productiva con 100 mil familias establecidas en decenas de miles de hectáreas y dio paso a procesos de industrialización y comercialización del cáñamo, la coca y la amapola, actividades que representan réditos para un amplio espectro social interno que incluye desde candidatos presidenciales, legisladores, jueces y banqueros hasta capos de la droga de diverso perfil, proveedores de armas, oficiales y tropas del Ejército, paramilitares, raspachines y “pericos”. Las guerrillas izquierdistas, conforme a declaraciones de sus comandantes, perciben ingresos por tributos cobrados a los campesinos, refinadores y narcotraficantes.

Además de defender su cuota en el gran pastel del narcotráfico, cuya fracción sustantiva es retenida e invertida en las metrópolis, la oligarquía norteña encontró en el Plan Colombia la mejor coartada para impulsar su reforma agraria “al revés”, consistente en expulsar de sus asentamientos ancestrales a los campesinos y a las comunidades indígenas, apropiarse de sus tierras a través de los operativos del Ejército y las bandas paramilitares y, ulteriormente, integrar latifundios para el cultivo de la palma africana y otras producciones congruentes con la nueva división internacional del trabajo promovida por el capital transnacional desde hace un cuarto de siglo.

El debilitamiento multifacético de Colombia, que incluso le ha llevado a la pérdida del control estatal de vastas extensiones su territorio y de la mitad de sus municipios, abrirá un ancho cauce para el intervencionismo estadounidense que, blandiendo el mito de la “sociedad sin drogas”, ha criminalizado a una nación en un intento de legitimar una guerra neocolonialista.

La amarga experiencia colombiana no se circunscribe a sus fronteras. Precisamente los apartados siguientes de este estudio historiográfico buscan dar cuenta de la progresiva inclusión del Ecuador en las redes de la estrategia del eje Washington-Bogotá.

II. Mahuad entrega la Base de Manta

Las relaciones colombo-ecuatorianas venían desenvolviéndose en el marco de una tradición de respeto mutuo a los principios de soberanía, autodeterminación, cooperación y solución pacífica de las controversias. La política exterior del demócrata cristiano Jamil Mahuad Witt, presionada por la Administración Clinton, rompió con esa plausible trayectoria y dio inicio al progresivo involucramiento del país en el conflicto de marras. Infamantes episodios jalaron el viraje.

El 26 de octubre de 1998, después de múltiples ajeteos diplomáticos respaldados, cuando no impuestos, por las naciones garantes del Protocolo de Río de Janeiro, con los Estados Unidos a la cabeza, Mahuad Witt y Alberto Fujimori firmaron los Acuerdos de Brasilia, que zanjaron el viejo litigio territorial ecuatoriano-peruano, que habíase activado con la Guerra del Cenepa de 1995. Aspiración de los dos pueblos, la Paz de Brasilia fue mayoritariamente respaldado en el Ecuador, no obstante que para su concreción nuestra cancillería, bajo la titularidad de José Ayala Lasso, tuvo que ceder en todas sus reivindicaciones y a que detrás de las presiones de la Casa Blanca podía vislumbrarse su nueva estrategia injerencista en la subregión andina. ¿A qué se alude?

Esencialmente a la sustitución de la desgastada consigna del anticomunismo por la truculenta campaña contra el narcotráfico, operativo instrumentado a partir del viejo método imperial de criminalizar a los pueblos que se quiere desorganizar y destruir.

La invasión a Panamá de 1989 –etiquetada como Operación Causa Justa- se hizo ya bajo la nueva pancarta. Para Colombia y las demás naciones andinas, la estrategia fue cobrando carta de naturalización a lo largo de los 90, ya mediante exigencias a nuestros gobiernos para que endurezcan sus legislaciones antinarcóticos, ya por el chantaje de las descertificaciones, ya a través de una propaganda que asociaba mecánicamente la producción y el comercio de estupefacientes con las actividades de grupos insurgentes, ya por vía de apoyos logísticos para la persecución a carteles enemigos y a distribuidores marginales.

Para los casos ecuatoriano y peruano, la instrumentación completa de la cruzada presuponía el arreglo de su añejo diferendo limítrofe, arreglo tanto más necesario cuanto que el propósito del Pentágono no era otro que fusionar a los ejércitos de ambos países sudamericanos para un operativo de “yunque y martillo” enfilado contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La táctica a dos puntas de Washington pudo vislumbrarse desde que la potencia mundial proveyó ayuda para la contienda tanto al ejército ecuatoriano como al peruano.

Un hito crucial en la incorporación del Ecuador a la guerra civil colombiana constituye la cesión por parte del régimen cipayo de Mahuad de la Base Aérea de Manta a EE. UU. El investigador Marcelo Larrea precisa el sentido de esa entrega cuando escribe: “La base aérea de Howard en Panamá, involucrada en diversas operaciones de intervención militar de Estados Unidos en América Latina ha transferido y extendido sus operaciones al Ecuador, Aruba y El Salvador, a través de los llamados Forward Operating Location (FOLs) o Centros de Operaciones Avanzadas (COA). A través de las acciones del COA, sobre las cuales el Ecuador no tiene ningún control, Manta se ha transformado en una cabeza de playa de los Estados Unidos para intervenir militarmente

en Colombia, involucrando al país en la violación cotidiana a los derechos de autonomía y autodeterminación del pueblo colombiano”. (ADITAL, Universidad de Cuenca, agosto del 2002).

De su lado, el investigador Manuel Salgado recuerda: “En enero de 1999, miembros de las fuerzas armadas de los EE. UU. establecieron contactos con altos funcionarios del Ministerio de Defensa del Ecuador para explorar la posibilidad de que les conceda la Base de Manta. En febrero realizaron las consultas entre la Embajada de los Estados Unidos en Quito y los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional. Entre el 17 y el 19 de febrero, una delegación, encabezada por el embajador Richard Brown, llegó al país, se entrevistó con los delegados de la Cancillería y del Ministerio de Defensa y, finalmente, analizó el Proyecto del Acuerdo... El 31 de marzo, la Embajada de los EE. UU. entregó a la Cancillería el proyecto de Acuerdo. Ese mismo día, con una velocidad supersónica, el Acuerdo fue remitido y consultado con el Ministerio de Defensa, que en la misma fecha comunicó, por escrito, que las Fuerzas Armadas no tienen objeción. Al día siguiente, 1 de abril de 1999, la Cancillería contestó a la Embajada americana aprobando el proyecto. Mediante un simple intercambio de notas, casi telegráficas, imprecisas, se constituyó un Acuerdo por el cual se concedió ‘el acceso y uso de las instalaciones de la Base de Manta a personal militar y civil de los EE. UU., para la realización de operaciones ampliadas, que consistirán en el envío de aeronaves y personal militar de los EE. UU, en rotación temporal’”. (Drogas, terrorismo e insurgencia, Ediciones La Tierra, Quito, 2002, pp. 302 y 303).

Los errores y las omisiones de ese primer convenio impusieron su reformulación y obligaron a su trámite en el Parlamento, donde -escribe Salgado- “cumplió un papel eficiente y siniestro Heinz Moeller, quien logró que la Comisión especial de Asuntos Internacionales y Defensa Nacional, de la que era su Presidente, resuelva que el Acuerdo *no necesita de la aprobación por parte del Congreso Nacional*”. (Ibid., 303)

El acta de la abdicación reza textualmente: “La Comisión Especializada Permanente de Asuntos Internacionales y Defensa Nacional se reunió en sesión extraordinaria el martes 9 de noviembre de 1999, presidida por Heinz Moeller y con la presencia de los diputados miembros Sixto Durán Ballén, Pascual del Cioppo, Elba González, Hugo Moreno, Clemente Vásquez y los legisladores Simón Bustamante y Marcelo Farfán. En la indicada sesión se escucharon los informes del Canciller Benjamín Ortiz Brennan y del Ministro de Defensa José Gallardo sobre el ‘Proyecto de Acuerdo, que se ha negociado entre los Gobiernos del Ecuador y los Estados Unidos, para la concesión por diez años del ejercicio del derecho de acceso y uso por parte de los Estados Unidos de las instalaciones de la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la ciudad de Manta’. En la misma sesión se resuelve: ‘Considerar que este proyecto de Acuerdo no se enmarca en ninguno de los seis numerales previstos en el artículo 161 de la Constitución Política de la República y que por tanto, no necesita de la aprobación por parte del Congreso Nacional, por lo que se ‘resuelve hacer conocer al señor Presidente del Honorable Congreso Nacional su recomendación para que el Proyecto de Acuerdo... sea remitido al Ejecutivo para su debida suscripción’. Este Informe así como su resolución fue aprobado por unanimidad en la sesión extraordinaria del día 10 de noviembre de 1999. La misma que contó con la presencia de los siguientes señores legisladores: Doctor Heinz Moeller, arquitecto Sixto Durán Ballén, señora Elba González, ingeniero Clemente Vásquez, ingeniero Lorenzo Saa, así como en representación del bloque de la Izquierda Democrática, el doctor René Mauge Mosquera. Firman la resolución Heinz

Moeller, Presidente y el Dr. Francisco Rocha Romero, Secretario de la Comisión”. (Ibid., pp. 303 y 304)

Tiempo después, José Gallardo pretendió justificar la cesión del fortín manabita en razón de carencias fiscales para costear algunas instalaciones y adecuaciones. ¡La soberanía nacional a cambio del típico y despreciable plato de lentejas!

La vindicta pública no tardó en llegar: la entrega de la Base de Manta y la conversión del país en “ojos y oídos” del Plan Colombia se convirtieron en detonantes adicionales del levantamiento nacionalista y popular que liquidó al oprobioso régimen de Mahuad el 21 de enero del 2000, en las jornadas bautizadas por los *shamanes* como la Revolución del Arco Iris.

III. Noboa y la “diplomacia del sombrero”

Durante la administración de Gustavo Noboa Bejarano visitaron el Ecuador Andrés Pastrana, inquilino del Palacio de Nariño, y Raúl Reyes, vocero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). Las visitas permitieron a los ecuatorianos conocer directamente los puntos de vista de los protagonistas de la confrontación armada colombiana, así como sus apreciaciones sobre nuestra nación en ese contexto.

Denegada una entrevista con Noboa Bejarano, el emisario de Manuel Marulanda, desde algún lugar de la capital ecuatoriana donde se reunió con juristas, líderes de organizaciones de defensa de los derechos humanos y periodistas, subrayó la índole interna y estructural de la violencia que, en su capítulo más reciente, desangra a la nación fronteriza desde el asesinato del caudillo popular Jorge Eliécer Gaitán en 1948, el memorable “Bogotazo”. “Nuestra lucha no es siquiera con el gobierno colombiano sino con el Estado, que mantiene condiciones desiguales para 18 millones de colombianos que están en la extrema pobreza”, habría expresado el vocero de los insurgentes, destacando además que el “enemigo número uno de las FARC son los Estados Unidos”. (El Comercio, 29 de septiembre del 2000). En la oportunidad, informó que su movimiento “no contempla extender los combates fuera de Colombia”; y por otro lado, que “las FARC respetan las decisiones soberanas del Ecuador” (alusión a la concesión de la Base de Manta a los norteamericanos). Siguiendo con la dialéctica interna del conflicto, vaticinó el fracaso de las conversaciones de paz FARC-gobierno, por cuanto, a su juicio, Pastrana buscaba únicamente utilizar al Plan Colombia como cortina de humo para profundizar la represión social y avanzar en la destrucción de las plantaciones de coca y amapola; es decir, para provocar una escalada de la “guerra en el Sur” (departamentos de Nariño y Putumayo, colindantes con el Ecuador). Anticipó que su grupo tenía previsto utilizar “una guerra de guerrillas aún más diluida en toda Colombia”, sobre todo si tiene que enfrentar una intervención directa de tropas estadounidenses. En referencia a la espinosa cuestión del tráfico de estupefacientes, hizo saber de una posición virtualmente ignorada en nuestro medio: “El narcotráfico es el principal problema de Colombia, por lo cual las FARC han planteado un completo programa de sustitución de cultivos ilícitos”.

Conforme era previsible, Pastrana Borrero publicitó un discurso apologético del Plan, presentándolo como una “iniciativa de paz y desarrollo social que no solo beneficiará a Colombia sino a la región”. En su intervención ante el Congreso Nacional apuntó:

“Ecuador no tiene mucho que temer y si mucho que ganar con la adecuada aplicación del Plan Colombia, que mantiene mecanismos y programas para reactivar la economía, fortalecer la justicia, promover los derechos humanos, aumentar la inversión social”. Finalmente se preguntó: “¿Cuál sería el destino de la frontera colombo-ecuatoriana si no se hace algo a tiempo y se deja esta zona abandonada al imperio del narcotráfico?”.

Fiel continuador de la política exterior de Mahuad, al punto que colocó al inefable Heinz Moeller como titular de la cancillería, Noboa Bejarano no solo que amplió las concesiones del control de la Base de Manta, sino que, coincidiendo con las demandas de Washington y Bogotá, reforzó el blindaje de la frontera norte, elevando hasta 6 mil la cifra de efectivos emplazados. Y luego de la visita de Pastrana, anunció un “Plan Ecuador”, preparado atropelladamente para regatear algunas migajas del Plan Colombia. ¡La mendicidad elevada a la categoría de tesis diplomática!

Después de la ruptura del diálogo entre Pastrana y las FARC, en febrero del 2002, rompimiento imputable tanto a una disposición de la administración Bush como a los incumplimientos del gobierno de Pastrana de la agenda acordada para los diálogos de pacificación, la lucha armada se extendió a las ciudades y subió en intensidad. Frente al nuevo escenario, Moeller endureció los adjetivos exclusivamente contra las guerrillas izquierdistas -“criminales”, “delincuentes”, “narcoterroristas”, descalificando aún más al Ecuador como eventual mediador en la deshumanizada contienda.

Postura tanto más irreflexiva del régimen de Noboa si se considera que, de los vecinos de Colombia, el Ecuador era el país que venía arrojando los peores impactos, identificables en el incremento de los gastos militares, la caída del comercio, el castigo a la población fronteriza con las fumigaciones, la destrucción de sus cultivos de subsistencia, el aumento de la migración interna, la acogida a miles de refugiados, la escalada de la violencia y la delincuencia... Y que, por consiguiente, más allá de la malhadada cesión de la Base de Manta, el propio interés nacional obligaba al gobierno a fomentar espacios de no intervencionismo y mediación. A juzgar por los hechos, sin embargo, más habría podido la lógica de protervos y mezquinos intereses.

Cuando como corolario del 11-S, George W. Bush incluyó a las FARC en la lista de organizaciones terroristas del mundo, en un nuevo acto reflejo la administración noboísta empezó a hablar de “narcoterrorismo”... y a proseguir con sus típicos “pases de sombrero”.

IV. Gutiérrez, peón de Uribe

El triunfo de Alvaro Uribe en las elecciones del 26 de mayo del 2002, victoria que le confirió el mando sobre el semicolapsado Estado colombiano, preludió una escalada de la guerra civil en hermano país. No solamente porque el ex gobernador de Antioquia, en su campaña, quemó las naves para una solución negociada del conflicto, al condicionar el diálogo al cese de las acciones de los rebeldes armados, sino porque, incluso antes de posesionarse como titular del Ejecutivo, emprendió en una ofensiva diplomática en la perspectiva sustentar una salida militar.

En un artículo titulado “¿Otro Vietnam?” (Newsweek, junio 26 del 2002), Joseph Contreras escribía: “Alvaro Uribe Vélez asumirá el cargo presidencial en agosto para declarar una guerra total a los principales adversarios de su nuevo gobierno: las FARC.

Esta semana, Uribe buscará un mandato diferente cuando haga su primera visita a Washington. El ha dicho que quiere mucho más ayuda estadounidense para combatir los flagelos del tráfico de drogas y el terrorismo. La Casa Blanca está pidiendo al Congreso ofrecer a Colombia otros 572 millones de dólares, adicionales a los 1.300 dispuestos para el lanzamiento del Plan Colombia dos años atrás”. Acerca de esa misma gira, Alejandra Farfán, corresponsal de Tiempos del Mundo en Bogotá, reportaba sobre el periplo europeo del mandatario electo con los siguientes datos: “Uribe, quien sostuvo reuniones con altos funcionarios de Francia y España, les pidió cooperación y compromiso decidido para sacar adelante las estrategias contra el terrorismo. Durante su estadía en Madrid, sostuvo conversación con José María Aznar, quien le habría ofrecido el respaldo de la Policía española para coordinar diversas acciones represivas”.

Desde el 7 de agosto del 2002, cuando Alvaro Uribe asume la presidencia, en medio de un atentado atribuido a las FARC que dejó decenas de víctimas mortales, la violencia en la república fronteriza ha venido alcanzando cotas paroxísticas, en una espiral donde – como en las tragedias griegas- cada cual pone lo suyo.

A un radical programa fondomonetarista, Uribe Vélez ha añadido un implacable plan político-militar: la declaratoria del estado de conmoción interna con la consecuente anulación de los derechos civiles, la creación de un ejército paralelo de campesinos y paramilitares, la red del millón de informantes, la intensificación de los bombardeos de poblaciones, el establecimiento de aldeas estratégicas tipo Indochina, el incremento de los operativos de fumigación, la incorporación de tropas y mercenarios norteamericanos adicionales.

La acción diplomática uribista ha sido infatigable. De vuelta a casa después de asistir al juramento presidencial de Lucio Gutiérrez, Uribe sorprendió al continente con su pedido para que la Casa Blanca “lidere un masivo despliegue naval y aéreo, similar al que moviliza en el Golfo Pérsico”. Poco después, alentó la “Declaración de Panamá”, por la cual los países del Istmo y la Argentina de Duhalde acordaron cooperar con el gobierno colombiano en su lucha contra los narcotraficantes y guerrilleros. En la ocasión, anticipó su intención de requerir a los países limítrofes la integración de una fuerza militar multinacional para que intervenga en su país. (Tiempos del Mundo, 20 de febrero del 2003). El 12 de marzo último (2003) reunió en Bogotá una Cumbre sobre Seguridad, a la cual asistieron cancilleres y altos funcionarios de ocho naciones latinoamericanas, además de observadores de EE. UU. y la Unión Europea; en la cita, la pretensión de Uribe fue forzar a que Brasil, Venezuela y Ecuador declaren “terroristas” a las FARC, decisión que la OEA había negado. No obstante, aunque no logró apoyo para su petición maximalista, obtuvo la firma para que los visitantes coordinen con las autoridades colombianas diversas acciones de control fronterizo.

La doctrina de Uribe puede condensarse en su llamado a la internacionalización de la guerra civil colombiana. Posición, por cierto, nada original puesto que –conforme apuntamos- constituye la médula de la Iniciativa Regional Andina, nuevo nombre y nuevo alcance del Plan Colombia introducidos por Bush Jr.

Semejante postura del mandatario colombiano sería cabalmente evaluada por el investigador panameño Nils Castro: “Los efectos transfronterizos de la violencia colombiana son cada vez mayores. Aparte que Bogotá ha perdido el control de extensas zonas del país, parte de su política contrainsurgente es forzar a los países vecinos a

involucrar a sus fuerzas armadas en el conflicto. Procura realizar su guerra con ejércitos de otros. Bogotá piensa que si Panamá no tiene ejército bien puede pedir el retorno de las tropas norteamericanas. Esto es, convertirse en una plataforma del Plan Colombia, como ya sucede en el caso de la Base Manta, en Ecuador. Pero involucrar a los vecinos no es una forma de ganar la guerra, sino de extenderla. En últimas fechas, Uribe ha ido más allá. En el discurso que leyó en Davos, Suiza, demandó que su país reciba un tratamiento similar al de Iraq, solicitando que enseguida de la próxima guerra las fuerzas expedicionarias se muden del Golfo a Colombia. Extraordinaria situación: mientras la mayor parte del mundo procura evitar la hecatombe, Uribe pide que le sirvan la guerra a domicilio”. (Boletín de la ALAI, 15 de febrero del 2003).

Sorpresas del tiempo: la extravagante postura de Uribe encontrará eco en el Ecuador.

El coronel Lucio Gutiérrez, en su condición de candidato de “los de abajo” en las presidenciales del 2002, exhibió la tesis de la neutralidad frente al conflicto armado que flagela a la vecina Colombia. Instalado en Carondelet, a través de una zigzagueante diplomacia, ha conducido al Ecuador a un creciente involucramiento en esa degradada confrontación.

Su visita a Estados Unidos marcó el viraje. En la ocasión, luego de dialogar con George W. Bush declaró: “Debemos apoyar, todos, de manera protagónica a Alvaro Uribe”. Del verbo a la acción, en plena austeridad fondomonetarista y pese a tener a la economía “encorsetada” a la dolarización, dispuso la descomunal alza del presupuesto de Defensa, luego ajustada por el Congreso; incorporó al servicio a 1.100 reservistas; anunció un aumento del 10 por ciento en la nómina castrense; elevó de 6 mil a 9.000 los efectivos emplazados en las provincias fronterizas, cifra esta última superior a la de las tropas que movilizara el país en la guerra del Cenepa; unificó el mando para operaciones de interdicción naval y aérea desde la Base de Manta; constituyó una zona especial de 10 km en la frontera norte; permitió que militares y diplomáticos extranjeros inspeccionen las guarniciones, y conforme a denuncias de los medios, habría aceptado la ampliación de la Base de Manta y tendría en carpeta la entrega de la isla Baltra a EE. UU. Gutiérrez se ofreció para mediar, sin pedido y, al tenor de las instrucciones del inquilino de la Casa de Nariño, en la última Cumbre de Río requirió al secretario general de la ONU para que presione la rendición de las FARC.

Otra prueba de la escalada de Ecuador en la estrategia del eje Washington-Bogotá se cumplió el pasado 22 de agosto (2003), con motivo de la visita de Uribe a Quito. En la oportunidad, el mandatario paisa, arrogante tras asegurarse con Donald Rumsfeld, jefe del Pentágono, un alza de la ayuda militar a su gobierno, ignoró una demanda presentada por nuestra Cancillería para que delimite las fumigaciones en los departamentos de Nariño y Putumayo. Cautivó al oficialismo anfitrión con una explicación subjetiva de la violencia en su nación (un choque entre “buenos” y “malos”), sino que comprometió al país a profundizar su rol de “ojos, oídos y yunque” contra las FARC y el ELN. Dócilmente, el ex adalid de la Revolución del Arco Iris suscribió las nuevas tareas y sorprendió a los ecuatorianos con su petición para que realicen un mea culpa por su tardío alineamiento con la oligarquía colombiana: una estrambótica forma de asumir la regionalización del Plan Colombia. ¡Cosas verás, Sancho!

En compensación por estos favores, el “Señor de las Sombras” –la identificación de Uribe según Newsweek- habría admitido negociar salvaguardias comerciales que presente Ecuador. Nuevamente el plato de lentejas...

Un suceso último, el pedido epistolar de los ex presidentes López Michelsen, Turbay Ayala y Samper para que Uribe y el líder guerrillero Marulanda –acogiendo el “clamor nacional”, reza la carta- inicien conversaciones pacificadoras, a partir de un Acuerdo Humanitario para liberar rehenes, ha venido a subrayar los extravíos de la tradicionalmente cándida diplomacia nacional.

V. El Plan Colombia en la picota

Sucesos recientes en la escena mundial como el empantanamiento con sabor a derrota de Estados Unidos en Iraq y la premura de George W. Bush por exhibir algún trofeo bélico en su carrera por la reelección, han contribuido a elevar la temperatura política en las naciones andinas y desatar acontecimientos que pueden incidir en la actual estructura de los bloques sudamericanos.

Al sur de los Andes, la intifada boliviana desarticuló al ejército y liquidó al régimen del sanguinario Gonzalo Sánchez de Lozada, quien tomó la conocida ruta de Miami dejando tras de sí una situación de “poder dual” similar a la que surgiera de la Revolución de 1952 y que preludia cercanos y espectaculares episodios. Más allá del sentido de su desenlace final, la caída de “Goni” el pasado 16 de octubre marca ya un hito histórico en la resistencia continental contra la globalización corporativa, tanto en su expresión comercial como en su formato compulsivo e intervencionista. No es casual que el pueblo del altiplano focalizara sus protestas contra la venta de gas a EE.UU. a través del consorcio Pacific LNG-Repsol, British Gas y Panamerican Energy.

De su lado, las pujantes movilizaciones de campesinos y sindicalistas peruanos han revelado –igual que en la mayoría de países del área- los límites de las políticas del Consenso de Washington y mantenido en jaque y con la popularidad en soletas al tecnócrata Alejandro Toledo.

Al norte de la subregión los acontecimientos han llegado en cascada y han girado de modo más directo sobre el Plan Colombia. Específicamente, han derivado de las prepotentes acciones del presidente Alvaro Uribe. En el frente interno, tales acciones se han orientado a institucionalizar los ajustes monetaristas, y en el externo, a impulsar la multilateralización de su inveterado conflicto civil. El triple descalabro del mandatario “paisa” en fechas últimas con su derrota en el referendo convocado para volver irreversible el modelo liberal esquizofrénico, la pérdida de representación del oficialismo como resultado de los comicios para renovar autoridades seccionales y el veto en el Congreso a su pretensión reeleccionista en el 2006, aparte de desplomar su liderazgo forjado en Harvard y en sus correrías en la gobernación de Antioquía, ha venido a proyectar, debido al triunfo del Polo Democrático incluso en la emblemática Bogotá, una inusitada vitalización de la izquierda parlamentaria y el correlativo y seguramente definitivo hundimiento del maridaje liberal-conservador. El Polo Democrático es una organización crítica del “capitalismo antropófago” y de la institucionalidad integrista adelantada por Uribe Vélez bajo el señuelo de la criptofascista “seguridad democrática” y de la fementida campaña contra el

narcotráfico, amén de propugnador de una salida política al choque entre el semicolapsado Estado colombiano con las guerrillas izquierdistas.

Venezuela y Ecuador han resentido, cada cual a su manera, el planteo autocrático e injerencista del inquilino de la Casa de Nariño. Y es que, en la perspectiva de aupar fuerzas frente a los desafíos arriba enunciados, embistió contra sus vecinos grancolombiano con tácticas extraídas de los manuales de guerra psicológica. Mientras a Hugo Chávez le acusó de facilitar el territorio llanero para el entrenamiento de milicias de las FARC, e incluso de financiar a la red fundamentalista Al Qaeda, la “bestia negra” de los halcones de Washington; a las FF.AA. ecuatorianas les tildó de “corruptas”, de modo genérico y sin aportar prueba concluyente sobre su participación en un ilícito de compraventa de armas. En ambos casos, la diplomacia uribista cumplía fines protervos. En el primero, orquestando a la CIA en su plan desestabilizador de la Revolución Bolivariana, y en el segundo, buscando humillar a los uniformados nacionales para forzar su mayor involucramiento en operativos de contrainsurgencia en los abandonados departamentos de Nariño y Putumayo.

Mientras el impasse entre Caracas y Bogotá ha sido completamente superado, al menos en la superficie, a través de indagaciones de corte policial; las relaciones colombo-ecuatorianas muestran tendencia a exacerbarse, tanto por el pedido del hamletiano Lucio Gutiérrez para que su colega norteño se retracte de su temeraria imputación, como por el resurgimiento en la (casi) totalidad de la población ecuatoriana de un sentimiento nacional defensivo y pacifista. Sentimiento afiebrado más recientemente por el develamiento de acuerdos suscritos por Ecuador con el Comando Sur y la tristemente célebre Dyncorp.

Esta constelación de acontecimientos, particularmente las derrotas políticas de los “mimados” de la Casa Blanca, Sánchez de Lozada y Uribe, demostrarían que al Plan Colombia le falta aún superar la prueba de la práctica. Algo similar le ocurre al ALCA.

Quito, noviembre del 2003

RESUMEN

Esta ponencia busca explicar la lógica de la estrategia de dominación geopolítica que los Estados Unidos, con la complicidad de gobiernos clientelares de la subregión andina, viene instrumentando en América del Sur a través de Plan Colombia. A partir de este telón de fondo, la investigación da cuenta de las posiciones que los distintos regímenes ecuatorianos han adoptado frente a las presiones de Washington y Bogotá. Finalmente, evalúa el panorama andino más reciente, signado por fenómenos como la caída de Sánchez de Lozada y el debilitamiento político de Alvaro Uribe, que demostrarían un resurgimiento de la resistencia contra la globalización corporativa expresada en el Plan Colombia y el ALCA.

